

Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

- I -

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (fs. 408/410) revocó la sentencia de la instancia anterior, y resolvió aplicar la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamo a la suma correspondiente a los honorarios de los letrados de la parte actora, desde el 6 de Enero de 2002 y hasta el efectivo pago.

Para así decidir, el a quo sostuvo que los intereses (tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A.) establecidos por el artículo 61 de la Ley Nº 21.839 (mod. por la Ley Nº 24.432), se encontraban condicionados al régimen de convertibilidad de la Ley Nº 23.928, por lo que con la sanción de la Ley Nº 25.561 no resulta aplicable la tasa de interés determinada en aquella norma. Agregó que esta solución se ajusta a la realidad económico - financiera imperante en nuestro país, y al carácter alimentario de los honorarios.

- II -

Contra dicha sentencia, la Dirección Nacional de Vialidad interpuso recurso extraordinario, que fue concedido (fs. 413/416 y 422). Alega que la sentencia es arbitraria, ya que respecto de los intereses cuyo pago ordena, se aparta de la solución que brindan las normas aplicables -art. 61 de la Ley Nº 21.839, mod. por la Ley Nº 24.432-, sin fundamentar dicha decisión.

Asimismo, destaca que la aplicación de la tasa activa generaría un enriquecimiento incausado en el patrimonio de los letrados.

- III -

Si bien lo atinente a los honorarios regulados en instancias ordinarias, y la determinación del interés compro-

metido, en razón de su carácter fáctico, procesal y de derecho común es, como regla, ajeno a la vía excepcional del artículo 14 de la Ley Nº 48, reiterada jurisprudencia de V.E. ha establecido que este principio admite excepción cuando la resolución carece de la fundamentación necesaria (v. doctrina de Fallos 319:1612; 326:137; entre otros).

Atento a ello, estimo asiste razón al recurrente, toda vez que el a quo al decidir aplicar la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamo, prescindió de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Nº 21.839 (mod. por la Ley Nº 24.432), sustentando tal apartamiento -básicamente- en la modificación, con la sanción de la Ley Nº 25.561, del régimen de convertibilidad -Ley Nº 23.928- y en que dicha solución mantendría la coherencia y estabilidad del sistema instaurado, no obstante aclarar (v. fs. 408 vta.) la vigencia de la prohibición indexatoria.

En este sentido, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Nº 21.839, modificada por la Ley Nº 24.432, los réditos que corresponde reconocer con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Convertibilidad Nº 23.928 deben calcularse según la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina; y la Ley Nº 25.561, si bien deroga el régimen de convertibilidad impuesto por la Ley Nº 23.928, no modifica en lo sustancial los artículos 7 y 10 (v. art. 4, Ley Nº 25.561), por lo que se mantiene la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa.

En estas condiciones, el apartamiento de la normativa aplicable al caso sin fundamento idóneo y suficiente, descalifica la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido, sin que a ello obste las referencias a la variación

Procuración General de la Nación

del índice de precios o al cambio de las condiciones económica financieras, expresiones demasiado genéricas, que carecen de entidad suficiente para dar debido sustento a la prescindencia del texto legal mencionado.

Por lo expuesto, opino que V.E. debe dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido y remitir los autos al tribunal de origen, para que se dicte uno nuevo con arreglo a derecho.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2005.

MARTA A. BEIRÓ DE GONÇALVES

ES COPIA

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2005.

Vistos los autos: "Montemurro, Juan y otra c/ D.N.V. s/ expropiación irregular".

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal de la Nación, al que se remite en razón de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo. Notifíquese y remítase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI — ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO (en disidencia) — CARLOS S. FAYT — E. RAUL ZAFFARONI — JUAN CARLOS MAQUEDA — RICARDO LUIS LORENZETTI — CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).

ES COPIA

DISI-/-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

-//-DENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO Y DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA
CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisibile (art.
280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora
Fiscal, se declara improcedente el recurso extraordinario, con
costas. Notifíquese y devuélvase. ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO
— CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Recurso extraordinario interpuesto por **la Dirección Nacional de Vialidad**, repre-
sentada por el Dr. **Alejandro Tonelli**
Traslado contestado por **Juan Montemurro**, representado por los Dres. **Roberto L. S.
Zitara y Adolfo A. Baffico**
Tribunal de origen: **Cámara Federal de Apelaciones de San Martín**
Tribunales que intervinieron con anterioridad: **Juzgado Federal de Primera Instancia
n° 1 de San Martín**